

**RETOS DEL PROCESO DE PAZ DE LA HABANA A LA COMUNICACIÓN Y A
LAS CULTURAS POLÍTICAS**

GT3: Comunicación Política y Medios

Fabio López de la Roche¹

Resumen

El artículo aborda, en una primera parte, dos problemas estructurales del *régimen comunicativo* en Colombia, estimulados por la permanencia del conflicto armado: el de la fuerte presencia de la propaganda como género y modalidad de comunicación; y el de la tendencia a la estigmatización de los movimientos sociales, con el argumento de estar siempre infiltrados por la guerrilla.

En una segunda parte el artículo analiza críticamente la comunicación de los negociadores gubernamentales y de los voceros de la guerrilla en la mesa de conversaciones de La Habana, y sugiere ciertas transformaciones en la cultura política que tendrían que producirse desde las dos partes, pero también desde otros sectores de la sociedad colombiana (las elites dirigentes, los militares, las izquierdas, el sindicalismo) para que el proceso de paz pueda convertirse en un auténtico proceso social y colectivo de reconciliación nacional.

....

¹ Historiador. Ph.D. en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

Si bien los acuerdos de La Habana podrían abrir posibilidades inéditas de ampliación de relaciones de justicia y democratización política y social (y creemos que el debate ciudadano y los preacuerdos sobre el tema agrario y campesino de hecho han avanzado sustancialmente en esa dirección), muchas de las tareas de democratización de la vida colombiana constituyen un trabajo colectivo de mediano y largo plazo que tendrán que abordarse en el contexto del posconflicto.

Dos problemas estructurales de la comunicación pública en Colombia que deberían resolverse con un proceso de paz exitoso

Pese a las positivas transformaciones que han ocurrido en la transición de Uribe Vélez a Santos, a favor de un régimen comunicativo menos tradicionalista, menos ideológico, menos hacendario, menos monológico, menos propagandístico y obsesivo con la negación del conflicto armado y con la idea de que la guerrilla estaría en “el fin del fin”, y no obstante la indudable restitución de un clima liberal-democrático y de menor pugnacidad y polarización en la comunicación con respecto al clima impuesto por el anterior gobierno (López de la Roche, 2013), hay algunos problemas estructurales en el régimen comunicativo colombiano que no se asocian solamente a los dos últimos gobiernos y que tienen que ver con la permanencia del conflicto y la manera como éste afecta la comunicación pública.

Conflicto armado y fortaleza de la propaganda en la comunicación pública y la gubernamental

Uno de los efectos del dilatado conflicto armado que ha vivido Colombia durante más de medio siglo, es la tendencia al manejo propagandístico de la información no sólo sobre el propio conflicto armado (en la atribución de la autoría de ataques o actos terroristas, número de afectados o de bajas al enemigo, etc.), sino también

sobre actividades conexas como la política militar o el impacto de esta sobre la población civil.

No sobra recordar que la primera víctima en medio de un conflicto armado termina siendo la verdad informativa, frente a la cual los actores armados, incluidos los gubernamentales, van a querer torcerle el cuello, para favorecer de manera instrumental versiones favorables a sus respectivos intereses. Hay que precisar también en este punto que la propaganda como modalidad de comunicación no se corresponde con un orden político democrático y que históricamente se asocia más a regímenes de tipo soviético y a sistemas políticos fascistas. Por lo tanto, la propaganda constituye una forma de comunicación autoritaria y abusiva para con las audiencias y su derecho a tener versiones contrastadas y confiables de la realidad informativa.

Una de las expresiones de ese carácter instrumental que adquiere la comunicación pública y la comunicación gubernamental en Colombia, es la permanencia a través de distintos períodos de gobierno de los discursos acerca de los militares como héroes. Estos han estado presentes en las propagandas de la Comisión Nacional de Televisión sobre los militares que pasaron por las pantallas de televisión durante muchos años; en la reiterada publicidad oficial en diferentes medios en torno a que “los héroes en Colombia sí existen”; en las piezas publicitarias institucionales presentadas durante los dos últimos años del gobierno Uribe con motivo del Bicentenario de la Independencia, sugiriendo una clara línea de continuidad entre la gesta emancipatoria de 1810-1819 y la lucha contemporánea contra las FARC (un uso abusivo y claramente instrumental de la historia), y en los comportamientos muchas veces rituales de los colombianos frente a los puestos militares en las carreteras, levantando sus dedos pulgares como signo de agradecimiento y solidaridad con ellos. Si bien en este último caso, en tal comportamiento de conductores y viajeros se expresa una indudable

solidaridad de los colombianos frente al soldado raso que en lugares como La Línea, el puente de Cajamarca y otros, protegen la infraestructura de eventuales ataques guerrilleros, hay que tener en cuenta que en ese gesto de los colombianos en las vías se expresa muchas veces también una solidaridad mecánica y acrítica con los militares, alimentada por las modalidades de propaganda oficial que aquí analizamos.

La permanencia del conflicto armado interno coloca entonces al periodismo y a los medios de comunicación en una condición de instrumentos para las políticas oficiales de persuasión y de manipulación de masas ligadas a las necesidades de la guerra: crear sensaciones de que la confrontación militar se está definiendo a favor del Estado (el famoso “fin del fin” de la guerrilla o la negación de la existencia del conflicto armado a través de un recurrente dispositivo retórico durante los gobiernos de Uribe Vélez), o generar climas psicológicos y de opinión que favorezcan la adopción de un fuero militar permisivo con las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública o de la Policía.

La paradoja y la problematicidad de todos estos dispositivos de producción y representación mediática de los militares como héroes es que esa misma institución es la responsable de casi tres mil desapariciones forzadas en el caso de los “falsos positivos”, y de alianzas expresas o tácitas y de omisiones y complicidades con decenas de masacres cometidas por los paramilitares (El Salado, Mapiripán, etcétera).

Comentando el reciente informe del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto armado colombiano en los últimos 50 años, una reseña crítica del mismo por la revista “Semana” destaca que

“particularmente inquietante”, dice el informe, es la responsabilidad de la fuerza pública. La institución encargada de proteger a los civiles, figura con presunta responsabilidad por 158 masacres con 870 víctimas, 2.340 asesinatos selectivos, 57 actos de sevicia y 182 ataques a bienes privados, sin contar la lista colosal de detenciones arbitrarias y torturas en tiempos del Estatuto de Seguridad o la desaparición forzada, que está por investigarse.

El informe increpa al Estado, que volvió la espalda a los dilemas y la violencia del campo, cerró los ojos al paramilitarismo mientras los militares lo promovían y tomó decisiones, o las omitió, que contribuyeron a la confrontación (Semana, “Para poner a pensar a Colombia”, 2013: 36-37).

Esa comunicación propagandística no sólo crea ambientes favorables a la militarización de la sociedad, sino que impide una deliberación crítica y una rendición de cuentas claras a la sociedad por parte del estamento militar, sobre las políticas institucionales para garantizar una real seguridad de la población campesina, de los líderes de restitución de tierras, de los miembros de la Marcha Patriótica y de otras organizaciones políticas y sociales alternativas, y de los guerrilleros que se reincorporen a la vida civil y a la participación política legal a través del proceso de paz.

Conflicto armado, medios de comunicación y estigmatización de los movimientos sociales.

Una de las maneras como la permanencia del conflicto armado afecta la imagen de los movimientos sociales tiene que ver con la tendencia a la estigmatización o

señalamiento de los movimientos sociales sobre la base del argumento que cualquier movilización de protesta, huelga o paro de relevancia nacional o regional, está supuestamente infiltrado por la guerrilla de las FARC. Las FARC terminan convirtiéndose en algo similar al Espíritu Santo que está en todas partes pero que nadie lo ve, en una información sin datos ni evidencias comprobables, muy definida por acentos y discursos marcadamente ideológicos.

Este argumento se volvió parte de la estrategia de los Ministros del Interior desde hace muchos años y a veces de los Ministros de Defensa, para descalificar a los movimientos sociales, muchas veces sin ninguna evidencia de la existencia real de ese tipo de relación (López de la Roche, 2002).

En el caso del movimiento indígena del Cauca que ha dado sobradas pruebas históricas de su actitud pacifista y crítica frente a los actores armados, incluidas las FARC, frente a las cuales han establecido claras distancias políticas y simbólicas, tanto los gobiernos de Uribe Vélez como el de Santos han recurrido a la descalificación de sus movilizaciones con el argumento de estar infiltrados por las FARC.

No estamos sugiriendo que el periodismo y los medios oculten las relaciones entre los movimientos sociales y las guerrillas en aquellos casos en que ellas existen. Lo que demandamos es información factual seria y comprobable, pero también responsabilidad social e interpretación compleja desde la titulación y los géneros editoriales y de opinión, de las distintas situaciones regionales de conflicto, las cuales tienen que ver con exclusiones históricas de regiones y poblaciones, responsabilidades estatales y gubernamentales por esas exclusiones, pero también con poblaciones que pueden ser base social de los grupos guerrilleros como también simples aliados coyunturales o forzados de la insurgencia.

La tácita prohibición del cubrimiento periodístico del conflicto armado en el campo colombiano fomentada entre el 2002 y el 2010 por el uribismo y acatada por los grandes medios de comunicación, (desafiada solamente por el periodista Hollman Morris y por algunos reporteros de medios internacionales que continuaron realizando la reportería del conflicto armado en zonas campesinas), facilitó y sigue facilitando la manipulación oficial de la información y su cómoda descalificación ideológica de los movimientos sociales que tienen lugar en las zonas rurales del país.

En la coyuntura del paro campesino de mediados de 2013 en la región del Catatumbo, antes que estigmatizar al movimiento campesino por la presencia de la guerrilla en la movilización, y en una coyuntura histórica de negociación gubernamental de paz con las FARC, en donde debieran estimularse actitudes de confianza entre las partes, el Estado y el gobierno Santos pudieron haber hecho un mayor esfuerzo para recomponer su legitimidad perdida a través de una vigorosa política de inversión social en esa región históricamente abandonada por las instituciones, e incluso dar paso a una especie de ensayo de una zona de reserva campesina (Ospina, 2013). Ceder a la presión del ministro de Defensa y a las voces de aquellos sectores que preferían una solución del paro a través de la represión (aún reconociendo en este caso específico del Catatumbo la presencia de la guerrilla en medio de la movilización campesina), evidenció también las ambivalencias del gobierno Santos frente al proceso de paz, presionado por los militares, el uribismo y seguramente por intereses mineros y agroindustriales que ven como inconvenientes las zonas de reserva campesina (Bonilla, 2013).

La descalificación por el presidente del movimiento por estar infiltrado por la guerrilla, no sólo lo inscribe en la vieja política de los grupos dirigentes colombianos de estigmatización de los movimientos campesinos, que en este artículo cuestionamos, sino que además, no se corresponde con los propósitos de

la negociación de paz de La Habana (De la Torre, 2013), que se adelanta justamente para poder superar definitivamente este tipo de coexistencias ambiguas entre guerrillas y movimientos sociales. La descalificación del senador Jorge Robledo, acusándolo de ser el promotor de los paros y protestas de mineros y campesinos durante el mes de julio de 2013 (“Gobierno señala a instigadores de la violencia en paro”, 2013; “La ‘denuncia’ del presidente Santos”, 2013; Orozco, 2013), no sólo muestra la poca tolerancia del presidente con la única voz opositora de relevancia en el congreso, sino que deja una duda preocupante acerca de cómo se comportaría a futuro con una oposición mucho más amplia y sólida, con perspectivas de poder.

El manejo represivo inicial del paro por el gobierno, produciendo cuatro muertos de parte de los campesinos, nos parece indebido y cuestionable, y paradójicamente, le da argumentos a las FARC para insistir en la vigencia de las armas como instrumento legítimo de lucha social.² La policía y la fuerza pública en este tipo de protestas deben tener un especial cuidado con la vida de las personas. En esos escenarios se juegan también su propia legitimidad como institución policial y militar frente a poblaciones históricamente excluidas y abandonadas por el Estado. Hay que anotar, adicionalmente, que esos cuatro campesinos muertos, le importaron casi nada a los medios de comunicación y al periodismo “nacionales” que no exploraron acerca de sus vidas, sus trabajos y sus familias.

La guerrilla de las FARC, de su lado, como si no estuviera haciendo parte de una mesa de conversaciones y negociaciones de paz, saca un comunicado políticamente torpe, si su interés es ganarse la opinión pública colombiana, donde expresa que los campesinos del Catatumbo “pueden contar con nuestras filas, con

² Véase la argumentación de Jorge Torres Victoria, “Pablo Catatumbo”, en ““Esos temas no están aún sobre la mesa’: Farc”, El Espectador, domingo 14 de julio de 2013, p.10

nuestras armas, con nuestros combatientes. Dispuestos a recibirlos, a apoyarlos, a conducirlos a la victoria final (“Impactos del Catatumbo”). ¿Siguen con el sueño de “la victoria final” o es sólo la inercia discursiva del maximalismo revolucionario? Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, esas palabras constituyen signos equivocados si se quiere de verdad tener una opinión pública que respalde con fuerza y convicción el proceso de paz.

Como conclusión, mal manejo de la situación del paro campesino en el Catatumbo de parte del gobierno y de la guerrilla, lo que anticipa las tensiones y problemas que pueden venir a futuro con la puesta en marcha de las políticas de desarrollo rural durante el posconflicto.

La comunicación para la paz y las transformaciones en la subjetividad y las culturas políticas de los colombianos

Superar el esquema minimalista de los negociadores gubernamentales de que el modelo económico, el social, el minero o el militar no son negociables

Los negociadores gubernamentales, en parte debido a su comprensible afán de respetar la agenda acordada con las FARC e impedir que ella se cargue de todo lo divino y lo humano, pero también por la ausencia de una apuesta generosa de democratización política y social de parte del gobierno que representan, aparecen en su puesta en escena en la mesa de La Habana con un discurso defensivo, minimalista y a menudo poco generoso, frente a una guerrilla locuaz que apartada durante más de una década de los micrófonos y las cámaras estaría tratando de recuperar el tiempo perdido en su comunicación con la sociedad.

La insistencia repetitiva y defensiva de Humberto De la Calle en que el modelo económico, el modelo social, el modelo político y el modelo militar no se negocian,

si bien puede enviar signos de tranquilidad a la derecha conservadora y al uribismo, a los militares más oficialistas, a los latifundistas y sectores empresariales partidarios del mantenimiento del actual *status quo*, produce frente a sectores democráticos y progresistas de la opinión pública y del periodismo y frente a sectores críticos y bien informados acerca de los problemas nacionales, la sensación de que de acuerdo con las posiciones de los voceros gubernamentales, en el país no habría que cambiar nada, que esos supuestos modelos estarían funcionando óptimamente y que Colombia sería hoy casi que un paraíso o “el mejor vivero del mundo”. Pero tal actitud puede dejar también la sensación en la opinión de que los negociadores gubernamentales “quieren sacarla barata”.

En un país que vive una crisis social gravísima de su sistema de salud, que sufre una inequidad social de las más altas del mundo, donde está ausente una política pública y una legislación que consulte ante todo los intereses nacionales frente a un sector minero-energético rapaz porque la legislación y los grupos políticos dirigentes se lo permiten, donde las elites políticas han demostrado su incapacidad para construir un proyecto de país (luego de rogar durante años por un TLC con EEUU descubren que no han construido las vías necesarias para sacar los productos a los puertos de salida), donde la corrupción campea y los grupos dominantes utilizan a menudo sus recursos económicos y sus redes de relaciones políticas y sociales para perpetuarse en el poder y para enriquecerse, resulta mezquina la constante reiteración por Humberto De la Calle de la idea de que “el modelo no se negocia”. Tal afirmación manda unos signos muy confusos para aquellos otros sectores sociales distintos de los privilegiados y le resta vuelo y trascendencia histórica y social a la negociación con las FARC, cuyos resultados antes que concebirse como concesiones indebidas a la guerrilla, podrían proyectarse y promoverse desde el discurso de los negociadores y desde el discurso presidencial como una oportunidad para la ampliación de relaciones de



justicia y democratización con un impacto real sobre el conjunto de las relaciones sociales.

La crítica que aquí hacemos a la falta de una mayor proyección política y social de la negociación de paz con las FARC a través de una política social gubernamental que favorezca a amplios grupos sociales más allá de los tradicionalmente favorecidos por el poder, se corresponde con lo que han expresado y demandado muchos líderes populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos que han participado en los cuatro foros por la paz organizados por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia, por mandato de la mesa de La Habana, y es que el proceso de paz no puede circunscribirse a un pacto de cúpulas gubernamentales y guerrilleras.

Contrariamente al minimalismo de Humberto De la Calle, creo que la negociación de paz con las FARC tendría que abrirse paralelamente a un mayor diálogo con las demandas provenientes de amplios grupos de la sociedad, lo cual le daría una mayor legitimidad y respaldo ciudadanos. Tal proyección supondría desde el punto de vista comunicativo y de la mediación periodística, darle la voz a los distintos grupos que han estado excluidos de la posibilidad de ser escuchados en sus opiniones y demandas sociales, políticas y culturales, ampliar decididamente el espacio de lo decible alrededor del país que queremos.

Sin embargo, tenemos serias dudas sobre la posibilidad del gobierno de Juan Manuel Santos de trascender estrechos intereses de grupo o de clase social y fuertes afinidades personales con los privilegiados y con el estamento militar, para promover un nuevo orden social y político más justo y más pluralista, comprometido con el respeto a la vida y los derechos humanos de todos los colombianos.

Algunos analistas hemos reconocido los importantes cambios ocurridos en la cultura política bajo Santos frente al modelo hacendario y monológico del anterior gobierno (López de la Roche, 2013); le valoramos además, el reconocimiento franco de la existencia del conflicto armado en el país y los esfuerzos para reconocer los derechos de las víctimas a través de la aprobación de la Ley de Víctimas y de la Ley de Tierras. Pero de otro lado, nos preocupan sus incongruencias y bandazos cuando termina haciéndole concesiones a los militares a través de un fuero militar extendido que ya empieza a tratar con indulgencia las desapariciones forzadas o “falsos positivos” (Uprimny, 2013), o cuando plantea torpemente y en contravía de los intereses nacionales y de todas las evidencias sobre la permanencia de graves situaciones humanitarias en el país (70 asesinatos sistemáticos contra líderes de restitución de tierras, control de territorios por bandas criminales o neoparamilitares en Urabá, la Costa Pacífica y en ciudades como Medellín), la salida de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Rodríguez Garavito, 2013; Uprimny, 2013; “No hay porqué temerle a la ONU”, 2013). En esa línea de análisis, una reconocida columnista ha planteado que “el mando civil sobre las fuerzas militares es débil y por eso cuando la Oficina de la ONU pidió investigar si a cuatro campesinos en el Catatumbo los mataron balas de la Fuerza Pública, el Gobierno salió a recortarle su estadía en el país (Ronderos, 2013)”.

En cuanto a la política económica y a la política rural aparece también la esquizofrenia gubernamental, pues Juan Manuel Santos el promotor de la Ley de Restitución de Tierras y cuyos voceros gubernamentales en la Mesa de La Habana pactan con los voceros de las FARC unas Zonas de Reserva Campesina y formas de tenencia de la tierra que protejan al pequeño propietario y a las economías campesinas de la voracidad latifundista y de la de la agroindustria de los combustibles o de la palma aceitera, de otro lado aparece también con la *otra faceta* de cercano amigo del embajador ante los EEUU Carlos Urrutia, quien con

su oficina de recursivos y sofisticados abogados Brigard Urrutia, le hace astutos esguinces a la ley para favorecer la apropiación de 40.000 hectáreas de baldíos en el Vichada por parte de la empresa azucarera Riopaila. Que el hoy ex embajador Urrutia sea su amigo no es el problema, sino que el presidente esté dispuesto a hacer pasar un proyecto de ley que haga que ese tipo de apropiaciones de baldíos por parte de los poderosos, en perjuicio de los campesinos a quienes colocarían en calidad de peones o de desterrados, se puedan ahora hacer legalmente.

A la luz de estos argumentos y evidencias, nos sentimos en el derecho y la obligación de preguntarnos hasta qué punto difiere la concepción del desarrollo del agro de Juan Manuel Santos, de la que inspiró los proyectos de Carimagua y los subsidios millonarios de Agro Ingreso Seguro (AIS) otorgados por el ex ministro Andrés Felipe Arias bajo el gobierno de Uribe a familias pudientes de la Costa Atlántica y de otras regiones del país. ¿Se trata del mismo modelo de gobierno “pro-rico” (Iturralde, 2009), el uno en una variante más hacendaria, familista y proparamilitar, y el otro en una modalidad más moderna, cosmopolita y sofisticada jurídicamente? Y en el fondo, ¿de dos modelos qué solo ven la generación de riqueza económica y social del lado del capital y que invisibilizan los aportes provenientes del mundo del trabajo?

La comunicación y la “puesta en escena” de las FARC en la mesa de negociación

De un artículo de Henry Robinson (2013), ex militante del Ejército Revolucionario Irlandés (IRA), sobre la posición y la manera como aparecen los líderes de las FARC en la mesa de negociación, del cual no comparto algunas tesis, rescato sin embargo su crítica a la “puesta en escena” de las FARC en la mesa de La Habana. El irlandés les dice a “Iván Márquez” y a sus compañeros de la guerrilla

que aparecer públicamente con las camisetas con las fotos de sus compañeros muertos como expresión de luto y de recordación pero también de beligerancia revolucionaria (con las imágenes de “Raúl Reyes” y de Jacobo Arango, un ex combatiente amigo de Iván Márquez, muerto a comienzos de 2013), si bien es respetable desde el punto de vista de sus sentimientos, envía un mensaje problemático con esos “mensajes en código, no muy ingeniosos, al otro bando de colombianos en las conversaciones de paz”. El ex combatiente del IRA cuestiona ante todo, como inconveniente para el avance del proceso de paz, el mensaje presente en esas actitudes y esas imágenes, de vigencia de la revolución armada. Si bien Robinson no dice nada sobre el asunto de los retos comunicativos que estarían teniendo que afrontar las FARC, por la necesidad de comunicarse en dos canales, con dos destinatarios, de un lado, por la necesidad de mandar unos mensajes de dignidad y resistencia en la negociación a sus propias tropas guerrilleras, y de otro, por la exigencia de enviar unos signos claros a la amplia opinión pública colombiana, desarrollando el argumento del irlandés, creo que los voceros de las FARC no han reflexionado sobre lo problemáticas, y seguramente dolorosas y agresivas, que resultan esas imágenes para la inmensa mayoría de los televidentes, por lo que ellas significan y por los actos a los cuales se asocian en la memoria de los colombianos (tomas y destrucciones violentas de pueblos, declaraciones agresivas defendiendo el secuestro como instrumento legítimo de financiación y de lucha política, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, etcétera).

En este punto tendríamos que subrayar el lentísimo y difícil descubrimiento de la comunicación y de la opinión pública por parte de la insurgencia de las FARC. No les ha ayudado a lograrlo pensar, como lo expresaban durante el Caguán, que la comunicación era la única *guerra* que no habían podido ganar. Con un pensamiento tan instrumental y tan funcionalista sobre la comunicación,

difícilmente van a poder manejar la comunicación y los medios con inteligencia, asertividad y retroalimentación.

Sobre este punto y volviendo a la “puesta en escena” criticada por Robinson, sería importante que los voceros de las FARC tuvieran en cuenta que la comunicación tiene que ver no sólo con los mensajes que queremos transmitir a otros grupos sociales de manera instrumental y persuasiva, sino también con el desarrollo de una capacidad de indagar y darnos cuenta *cómo somos percibidos por los otros*.

Si bien es respetable y comprensible una comunicación orientada a su militancia, las FARC tendrían que empezar a hablarle al grueso de la sociedad colombiana, a las inquietudes, cuestionamientos, desconfianzas, rabias y dolores que numerosos sectores de colombianos tienen frente a esta organización (algunos tienen también odios irracionales y actitudes viscerales de descalificación, inculcadas por los *odiadores* profesionales que ha producido el conflicto, a los cuales también tendrían que saber responder con inteligencia, argumentos e ideas y no sólo con fáciles y rígidas respuestas ideológicas).

Estoy de acuerdo también con quienes piensan que los dirigentes de las FARC tienen que pedir perdón a sus víctimas, pero que una expresión de ese tipo no puede provenir de presiones de los negociadores gubernamentales o del presidente Santos, sino de una propia reflexión y de una propia convicción sobre la necesidad de reparar, al menos simbólicamente,³ a sus víctimas.

Sin esa convicción sincera y auténtica de parte suya, y simultáneamente, de parte de los otros perpetradores en el conflicto colombiano, que tiene que ver con

³ Uso la expresión “simbólicamente” no en el sentido de algo opuesto a lo real y a lo material, como a veces se usa la expresión en el lenguaje cotidiano, incluso en un sentido peyorativo (“eso es meramente simbólico”), sino en la acepción totalmente contraria: dándole una altísima significación a “lo simbólico”, como capacidad de destacar el sentido y la significación que adquiere una actitud, un hecho, un pronunciamiento, en la vida social y cultural de una comunidad.

profundas reflexiones humanas y existenciales de tipo personal, pero también colectivo, no va a haber paz ni una auténtica reconciliación nacional.

La sociedad colombiana, en la que muchas víctimas de la violencia de muy distintas clases y estratos sociales han dado muestras fehacientes de su generosidad y su capacidad de perdón, apreciaría todos los gestos de autocrítica, de reparación simbólica y discursiva a sus víctimas y de solicitud de perdón, provenientes de los dirigentes de las FARC. Pero esto tiene que ser el resultado de un proceso propio, sentido y auténtico, y no de un ultimátum a dicha organización. El logro de esa convicción y su expresión seguramente tienen sus ritmos propios de maduración.

El otro elemento importante de la crítica de Robinson a la puesta en escena de las FARC en la mesa de La Habana, y que personalmente comparto, es que deben dejar de mirar al pasado y construir un discurso que mire hacia el futuro. Por más cruda que sea esta crítica, el irlandés tiene toda la razón. Hace unos meses tuvimos oportunidad de ver una película que estaba en la cartelera cinematográfica, nominada como mejor película extranjera en los Óscar, la cinta "No", del director chileno Pablo Larraín, dedicada a recrear la coyuntura histórica de las campañas por el "sí" o el "no" en el referéndum que tuvo que hacer el dictador Augusto Pinochet en 1988, presionado por la comunidad internacional, para decidir su permanencia en el poder. La historia gira alrededor de las conversaciones, contradicciones y tensiones entre la visión conceptual del publicista René Saavedra, el cual es contratado por la campaña del "No" para orientar el desarrollo de la misma, y la concepción de los intelectuales, dirigentes políticos y militantes de los partidos de izquierda, participantes en la organización de la campaña por el "No". Básicamente, la contradicción se desarrolla entre el concepto de Saavedra, el que después de muchas discusiones y tensiones finalmente se impondrá, de una campaña orientada a mostrar con fe, alegría y

optimismo un horizonte de futuro posible en democracia para todos los chilenos, en diálogo con jingles y estéticas comerciales y contemporáneas sintonizadas con la cultura juvenil y la vida urbana, y la visión marcadamente racionalista de los militantes y dirigentes de la izquierda política, partidarios de una campaña denunciante de la violencia y la represión de la dictadura, orientada hacia el pasado y visual y conceptualmente triste.

Cuando vi la película, salí de la sala de cine pensando que este film deberían verlo los voceros de las FARC en la mesa de negociación, pero también muchos de los militantes de nuestros grupos y partidos de izquierda, que siguen anclados aún en nuestros días a visiones instrumentales, tristes y denunciastas⁴ de la comunicación.⁵

Las FARC, como ha sucedido con todas las otras organizaciones que han vivido procesos de reincorporación a la vida civil, y ellas no serían la excepción en caso de darse ese proceso, van a tener que revisar muchas de sus concepciones políticas, de sus interpretaciones del país y de la sociedad colombiana y sus instituciones. Los viejos esquemas ideológicos del marxismo soviético o de otros marxismos ortodoxos y anquilosados no sirven hoy para pensar la sociedad. Lo cual no significa que el marxismo como una entre varias interpretaciones de lo social (más no como la única, y mucho menos como verdad) no pueda contribuir a comprenderla.

⁴ Con esta afirmación no pretendo decir que la denuncia no sea necesaria cuando el momento y las circunstancias así lo exigen. El problema de la comunicación denunciante es que a menudo en ella la denuncia se vuelve un *desiderátum*, una pauta programática, un deber ser. Y se descuida todo el horizonte de construcción a futuro, de desarrollo de un proyecto social, político y cultural.

⁵ A los días de haber visto la película, un amigo me comentó que León Valencia había sugerido en un reciente artículo en su columna de la revista "Semana", a los líderes de las FARC, ver la película de Larraín. Leí el artículo de Valencia (2013) y compartimos la misma visión y la misma sugerencia a las FARC y a las izquierdas.

Conclusiones

La sociedad colombiana tiene una oportunidad única y tal vez la última, de lograr la reconciliación a través de una negociación de paz con las FARC y con el ELN.

El avance de las conversaciones requiere de una apertura política y mental de los distintos actores políticos y sociales, civiles y militares, que participan en la vida pública colombiana. En ese sentido es deber de todos los que aspiramos a un país en paz y sin guerra trabajar por que se produzcan las necesarias transformaciones comunicativas, de actitudes y de la cultura política de los distintos grupos y sectores involucrados en la confrontación armada.

Los colombianos necesitamos trabajar en la superación de nuestras arraigadas actitudes, prácticas y tradiciones de intolerancia política y cultural. Ellas se alimentan de modelos simplistas y sectarios de pensamiento y de conocimiento, de moral y de conducta, que por períodos y al calor de las polarizaciones políticas y de intereses económicos de la coyuntura histórica, adquieren connotaciones de cruzada religiosa contra quienes piensan y viven distinto o proponen otros modelos de Estado o de sociedad.

El sistema educativo, el periodismo y los medios públicos y privados, los académicos y los medios universitarios tendrían que desarrollar esfuerzos educativos y formativos para complejizar las visiones de los colombianos sobre su historia y los problemas y conflictos nacionales y regionales.

Un esfuerzo notable de equilibrio informativo, de dar acceso a diversas voces y de apertura al conocimiento de la verdad sobre el conflicto, por más dolorosa y reveladora que resulte para las distintas partes, tendrán que hacer los medios públicos y privados, sus directores y redactores, en el caso en que se cree una Comisión de la Verdad.

Los negociadores del gobierno y la guerrilla, los medios de comunicación, los periodistas, los académicos y demás formadores de opinión podrían empezar a coordinar perspectivas en la imaginación del posconflicto, diseñando de manera propositiva y constructiva escenarios de futuro para el país y la sociedad, con desarrollo, equidad, justicia, libertad; con oportunidades para todos y no sólo para los más astutos o mejor conectados políticamente⁶; con pluralismo profundo, reconocimiento de la diversidad y respeto por la vida humana.

A la clase dirigente le corresponderá trabajar en el diseño y montaje de una institucionalidad nueva y eficiente para las zonas rurales, y a los militares y fuerzas policiales garantizar la seguridad, que hasta ahora no han brindado a los líderes de restitución, a éstos y a los liderazgos sociales que surjan de la aplicación de las nuevas leyes agrarias que se adopten. Sin un combate decidido a las bandas criminales y a los neoparamilitares en amplias regiones de la geografía colombiana y sin unos nuevos consensos del gobierno nacional con las elites locales y regionales, que respalden los procesos de paz y de restitución de tierras (James Robinson en entrevista de Zuluaga, 2013), y las Zonas de Reserva Campesina que se configuren, va a ser difícil la superación efectiva del conflicto, así se firme la paz.

⁶ Véase la crítica del profesor norteamericano James Robinson (Zuluaga, 2013), de la Universidad de Harvard, a cómo se hacen las fortunas de los ricos hoy en Colombia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonilla, M. E. (22 de julio de 2013). La prueba ácida. *El Espectador*, p.30.
- Carrizosa Umaña, J. (martes 16 de julio de 2013). Verdades del Catatumbo. *El Espectador*, p. 3.
- “Cuando ser bueno era malo”, *Semana*, 8-15 de julio de 2013, pp.38-39
- De la Torre, C. (23 de julio de 2013). “Catatumbo: la mesa auxiliar”, en *El Espectador* p. 28.
- “‘Esos temas no están aún sobre la mesa’: Farc”, (domingo 14. de julio de 2013). en *El Espectador*, p.10.
- “Gobierno señala a instigadores de la violencia en paro”, (20 de julio 2013). *El Tiempo*, pp. 1-2.
- “Impactos del Catatumbo” (martes 23 de julio de 2013) en *El Espectador*, p. 2.
- Iturralde, M. (16 de septiembre de 2009). “Un gobierno pro ricos”, en *Semana.com*, bajado 23 de septiembre de 2009, 7:43 A.M.
- “La ‘denuncia’ del presidente Santos”, (20 de julio de 2013) *El Espectador*, pp.6-7.
- “Las FARC, dispuestas a revisar “errores” en aras de la reconciliación”, en Periódico *La Jornada*, con información de Reuters y AFP, Sábado 4 de mayo de 2013, p. 21, bajada 4 de agosto de 2013, 8:33 A.M. de <http://www.jornada.unam.mx/2013/05/04/mundo/021n2mun>

López de la Roche, F. (1994). *Izquierdas y cultura política ¿Oposición alternativa?*, CINEP. Bogotá,

López de la Roche, F. (2002). *Periodismo y movimientos sociales: entre la estigmatización y el reconocimiento*, Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura – IECO – Politécnico Grancolombiano, Bogotá.

López de la Roche, F. (marzo de 2010). “Discurso presidencial y noticieros de T.V. (2002-2010) La reorientación afectiva de la nación”, *Revista Javeriana*, Bogotá.

López de la Roche, F. (2013). “DEL URIBISMO DOCTRINARIO A LA RECUPERACIÓN SANTISTA DEL ESPÍRITU LIBERAL EN LA COMUNICACIÓN. Concentración económica y alineamiento ideológico de los medios en Colombia, en contextos de hegemonía neoliberal, de polarización política derivada del conflicto armado y de ciudadanía comunicativa deficitaria”. En Dantas, M. (editor), *Avances en los procesos de democratización de la comunicación en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires.

“‘No hay porqué temerle a la ONU’. ONG rechazan decisión del presidente Santos de retirar la oficina de esa entidad en Colombia”, *El Espectador*, jueves 18 de julio de 2013, p.3

Orozco, C. (24 de julio de 2013). “El presidente está nervioso”, *El Espectador*, p.30.



Ospina, W. (domingo 21 de julio de 2013). “Antes de que el arco se rompa”, en *El Espectador*.

Peña, E. (domingo 5 de mayo de 2013) “Paz no puede ser un papel con 10 firmas”. Entrevista a Fabrizio Hochschild, *El Tiempo*, p.2

Robinson, H. (24 marzo de 2013). “Iván Márquez visto desde Irlanda”. *El Espectador.com*. Bajado 12 de julio de 2013, 9:50 A.M.

Rodríguez Garavito, C., (23 de julio de 2013). “Derechos humanos: un paso adelante, otro atrás”, en *El Espectador*, p. 29.

Ronderos, M. T. (viernes 19 de julio de 2013). “Los pueblos Potemkin del gobierno Santos”, en *El Espectador*, p. 30.

Samper, M. E. (domingo 12 de mayo de 2013). “Ciegas, sordas y cortas de seso”, en *El Espectador*, p. 42

Samper Pizano, D. (18 de noviembre de 2012). “En Colombia llovizna y en Inglaterra diluvia”. *El tiempo com*.

Semana (29 de julio al 5 de agosto de 2013). “Para poner a pensar a Colombia”, en *Semana*, edición 1630, pp. 34-37.

Uprimny, R. (domingo 21 de julio de 2013). “Una página de prensa es suficiente...”, en *El Espectador*, p.43

Valencia, L. (29 de marzo de 2013). “Recomendada para izquierdistas”, en *Semana.com*, bajada 5 de abril de 2013, 8:14 P.M.



Zuluaga, C. (martes 23 de julio de 2013), "Protestar es sano para una sociedad".

Entrevista al profesor James Robinson de la Universidad de Harvard, en *El Espectador*.